

# Humanidad

**Revista Electrónica de Estudios Humanísticos**

Universidad Luterana Salvadoreña

No. 4 Enero - Junio de 2020

## **Análisis de Coyuntura**

### **Una clave de lectura del tormentoso momento político que vive El Salvador**

**Dagoberto Gutiérrez**

Jurista

Universidad Luterana Salvadoreña

Al terminar la guerra civil, el sistema político del país fue remozado, sin cambiar sus fundamentos estructurales económicos y políticos; sin embargo, se estableció el papel predominante de los partidos políticos, a los que se entregó un verdadero monopolio sobre los aparatos del Estado. La antigua guerrilla fue convertida en otro partido político y, junto con ARENA, constituyeron una especie de viga maestra del nuevo régimen de post guerra.

De la misma manera, se organizó el aparato encargado de realizar periódicamente las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral, cuyo control fue entregado a los partidos políticos. Luego, vino la organización de la Policía Nacional Civil y la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas, al no ganar la guerra, perdieron su calidad de clase gobernante y, en el artículo 212 de la Constitución, se le estableció la función de defender la soberanía del Estado y la integridad del territorio.

Todo esto significó que, en el sistema político, apareció una nueva clase gobernante que sustituyó a los militares; sin moverse ni un milímetro, la antigua clase dominante, vinculada a la oligarquía, continuó ejerciendo su control sobre la vida total del país.

Esta situación determinó un desencuentro entre el universo político, en donde se realizaron remozamientos, y el universo económico, que permaneció inalterable. Es más, el nuevo andamiaje político, basado en los acuerdos de paz, que pusieron fin a la guerra civil, sirvió de fundamento para la entronización del neoliberalismo como política económica oficial de todos los gobiernos que, hasta nuestros días, siguieron al fin de la guerra.

Este modelo económico sometió, de manera rampante, el Estado al mercado e hizo de toda la vida social, una mercancía que tiene precio, pero no valor. Y así, la salud, la educación, la política, el pueblo, la democracia, la cultura, la identidad, todo, fue hecho mercancía y pasó a someterse a la balanza fatal de la oferta y la demanda. La agricultura fue desmantelada, la industria también, la emigración se convirtió en política estatal y cada emigrante se vio como una presión menos para el orden establecido.

En este escenario, la dependencia externa, sobre todo de los Estados Unidos, pasó a funcionar como una garra de águila, justificada y legitimada por los gobernantes, porque en ese país estaban los

emigrantes salvadoreños para enviar las remesas que sostienen, en buena medida, la economía nacional.

Todo este tinglado fue legitimado sucesivamente en cada evento electoral que se realizaba, y el pueblo acudió religiosamente a votar en unas elecciones donde participaban, formalmente, las izquierdas y las derechas; es decir, elecciones que podían llamarse democráticas.

De esta manera, todo funcionó bien durante más de 30 años; sin embargo, en los socavones de la realidad, ocurría que la inmensa riqueza de unos pocos producía la inmensa pobreza de los muchos, y este empobrecimiento abarcaba ostensiblemente a extensos sectores de capas medias, a pequeños y medianos empresarios, y así, lenta, pero inexorablemente, como la gota de agua sobre la roca, la gente, la que votaba y la que no votaba, la que trabajaba y la que no trabajaba, los profesionales y los obreros, es decir, de manera extensa, empezaron a cuestionar el orden establecido. Y en las cabezas de millones de personas, empezó a moverse la posibilidad de deshacerse de ese orden y construir uno nuevo.

Este era un sueño con mucha osadía porque, hasta ese momento, la imparable corrupción e incapacidad de los gobernantes para gobernar en beneficio de las mayorías, aunque muy a tono a los intereses de las minorías, era entendido como algo natural, es decir, como algo que tenía que ser así y no de otra manera. Pero, contra viento y marea, y estimulado por la quemante realidad de la crisis que devoraba, día a día, las entrañas de los intereses de amplios sectores sociales, se inició en el país un proceso de desnaturalización, y esto significó, someter a juicio político las gestiones gubernamentales de las derechas tradicionales y de las izquierdas, izquierdas que solo lo eran en su discurso, ya que eran de derecha en su gestión y desempeño.

El pueblo sometió a la criba de su nuevo juicio político el papel de los partidos políticos, los que, siendo dueños constitucionales del control del aparato y únicos representantes, como lo dice el artículo 85 de la Constitución, solamente representaban, en la práctica, a las cúpulas de sus partidos, y a determinados empresarios o grupos de empresarios, pero nunca, jamás, a sus votantes.

Por primera vez, este pueblo supo que la Constitución del país prohíbe el mandato imperativo (Artículo 125), que es el que le da poder al elector sobre el elegido; el que le da el poder de revocatoria al elector sobre este elegido; el que le da, en definitiva, el poder a la gente que vota. La Constitución impide esto, y establece el mandato por representatividad, que es, precisamente, el que se hundía y naufragaba de manera irremediable, sin que los partidos se percataran.

Pero, el pueblo llegó a saber y entender que ese orden establecido solo podía ser removido desde el desorden; es decir, desde una política fuera de este orden corrupto, y construyera otro orden, donde los intereses de la gente fueran tomados en cuenta y donde los candidatos y los presidentes no surgieran de estos partidos políticos. Se construyó, así, el escenario histórico que inauguró el actual momento político del país.

Por todo esto, las elecciones presidenciales del 2019 significaron una abrumadora derrota política del régimen. El candidato que llegó a la presidencia no representa a ningún partido político, aunque formalmente sí. Tampoco tiene, formalmente, opción de izquierdas o derechas, y no aparece, hasta ahora, formando parte de bloques económicos o políticos determinados; aunque, a poco más de un año de su gestión, no se nota el cumplimiento de programas claves para la vida de las personas, como la salud, la educación, la economía, el trabajo, el salario o el medio ambiente. Las encuestas lo siguen favoreciendo en altísimos porcentajes, con un apoyo superior al 90%; aunque la comunicación con los sectores sociales no puede calificarse de fluida o cotidiana.

Más allá de estos aspectos, que son importantes, conviene saber que este es un gobierno que puede entenderse como el agotamiento de la post guerra, es decir, de aquel periodo histórico que, siguiendo al fin de la guerra, abre un espacio para la reparación, la curación, la restauración, el reacomodo de las

heridas y los efectos sociales de veinte años de guerra. Esa post guerra no tiene, en realidad, una fecha determinada de finalización.

El actual gobierno no guarda ninguna relación con la guerra civil, ni estamos frente a un momento de transición, que supone que un antiguo orden ha sido derrotado y se ha iniciado un proceso de construcción de un nuevo orden, en medio de una lucha cruenta entre lo antiguo, que no termina de desaparecer, y lo nuevo, que no termina de aparecer.

Lo que caracteriza al actual gobierno es la confrontación con el orden partidario, que sigue controlando los aparatos del Estado, y no es una confrontación a partir de reformas o transformaciones sociales o económicas, pugnadas desde el gobierno.

Desde marzo del presente año, el escenario de esta confrontación es la peor pandemia que se haya visto a lo largo de nuestra historia y el manejo y eficiencia gubernamental en este terreno de salubridad adquiere día a día un poder gravitante sobre los próximos meses políticos venideros, incluidas las elecciones del próximo año.

Mientras tanto, el pueblo no es, en esta coyuntura, el protagonista principal, como sí lo fue en los primeros meses del año anterior. Toda la sociedad, sin embargo, está sometida a la tensión del enfrentamiento con un virus mortal, a la lucha por defender un nivel y una calidad de vida, y a la posibilidad de mejorar sus condiciones en las elecciones del próximo año.